SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 11/2013

Recomendación N°	11/2013
Autoridad Responsable	Director General de la Policía Ministerial del Estado de San Luis Potosí
Expediente	1VQU-0151/2011
Fecha de emisión/	20 DE JUNIO DE 2013

HECHOS

El 6 de julio de 2011, a las 16:00 horas, V1 al encontrarse en compañía de T1 afuera de su domicilio ubicado en la Colonia ISSSTE de esta Ciudad, varias personas armadas que no se identificaron lo encañonaron y se lo llevaron a bordo de un vehículo hasta las oficinas de la Policía Ministerial del Estado que se localizan en el Edificio de Seguridad Pública. Por su parte, V2 refirió que en la misma fecha a las 20:00 horas al circular a bordo de su automóvil sobre la calle de Arista, un vehículo le cerró el paso del cual descendieron varios individuos armados, lo bajaron a golpes de su coche y se lo llevaron a las mismas oficinas antes referidas. V3 refirió que en la misma fecha a las 17:45 también fue detenido cuando al caminar sobre Avenida Rutilo Torres, se le emparejó un vehículo del cual descendieron hombres armados quienes, mediante golpes, lo obligaron a subirse al automóvil llevándolo al mismo lugar, a las oficinas de la Policía Ministerial, lugar donde fue maltratado, agregando que uno de los agentes le colocó un arma de fuego en la cabeza.

Los agraviados coincidieron en señalar que estando en las oficinas de la Policía Ministerial del Estado, ubicadas en el interior del Edificio de Seguridad Pública, fueron víctimas de golpes y maltrato físico que les infligieron los aprehensores, con el propósito de que aportaran información sobre a la extorsión a una mujer de la tercera edad, dándoles a firmar diversos documentos cuyo contenido no les permitieron leer bajo la amenaza de continuar golpeándolos. Posteriormente fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Especializado en el Combate al Secuestro, imputándoseles el delito de extorsión.

Este Organismo Estatal recopiló datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad señalada como responsable, se realizó entrevista con víctimas y testigos, cuya valoración es objeto de análisis, en el capítulo de Observaciones de la presente Recomendación.

Derechos Vulnerados

✓ A la integridad y seguridad personales.

OBSERVACIONES

Esta Comisión Estatal precisa que no se opone a la prevención y persecución de delitos por parte de las autoridades, sino a que con motivo de su combate se vulneren derechos humanos. Lo anterior en virtud de que es un deber de los Estados proteger a las personas, combatir los delitos, sancionar a los responsables, mantener el orden público, y que la lucha con el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar la seguridad pública y el pleno respeto a los derechos humanos.

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias, se lograron acreditar conductas que configuran violaciones a los derechos humanos a la seguridad e integridad corporal en agravio de V1, V2 y V3, atribuibles a AR1, AR2, AR3 y AR4 agentes de la Policía Ministerial del Estado, referidas al maltrato que fueron víctimas durante su detención.

Las tres víctimas fueron coincidentes al referir que esta a las 16:00, 20:00 y 17:45 horas del 16 de julio de 2011, respectivamente, en distintos lugares de esta Ciudad, pero sin que ninguno de ellos opusiera resistencia, fueron obligados por sus aprehensores a subir a un vehículo en el que los llevaron a las oficinas de la Policía Ministerial que se localizan en el interior del Edificio de Seguridad Pública "Daniel Berrones Meza", siendo el caso que durante el trayecto y una vez en las mencionadas oficinas fueron víctimas de maltrato por parte de los agentes de la policía, quienes les imputaban haberse asociado para extorsionar a una persona adulta mayor.

Por otra parte, de acuerdo con el testimonio de T1, quien presenció el momento en que ocurrió la detención, precisó que él y V1 conversaban en Avenida Educación a un costado de la tienda ISSSTE, cuando tres personas del sexo masculino que portaban armas y que no se identificaron se acercaron a ellos y comenzaron a preguntarle a V1 sus generales, quien al responderles de inmediato fue esposado y llevado hacia la calle Recursos Hidráulicos donde se encontraba estacionada una camioneta en la que T1 observó que V1 fue obligado a subir boca abajo.

La versión sostenida por los quejosos en cuanto a la circunstancia de lugar en que ocurrieron las detenciones, fue coincidente con la informada por parte de AR1 y AR4, agentes de la Policía Ministerial del Estado, quienes solo omitieron precisar en su informe la hora en que sucedieron cada una de las detenciones; sin embargo se advierte que en ningún caso, los agraviados opusieron resistencia a su detención. Es por ello que la autoridad omitió acreditar con algún otro medio de convicción, para explicar el origen de las lesiones que presentaron V1 y V3. Además de ello, al mostrarles a las víctimas las fotografías de los agentes de la Policía Ministerial del Estado, éstas los señalaron como sus agresores a AR1, AR2, AR3 y AR4.

De la investigación realizada por personal de esta Comisión Estatal, se observó que en las declaraciones ministeriales rendidas por los quejosos y que obran en la Causa Penal 1, sí contaron con la asistencia del defensor de oficio, lo cual se corroboró además, con la entrevista al citado servidor público, quien reconoció como suya la firma que aparece en las declaraciones.

Al acreditarse maltrato durante la detención en agravio de V1, V2 y V3, se transgredió su derecho a la integridad y seguridad personal, prerrogativa de toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión, es decir, que la autoridad que actúa como aprehensora, desde el momento mismo de la captura, se responsabiliza en su totalidad respecto de la salud e integridad física, por tanto cualquier afectación en este ámbito acontecida durante el tiempo que la persona permanezca en detención, sin duda le es reprochable al servidor público.

Todo maltrato en la detención y toda molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos que deberán reprimir las autoridades, que nadie puede ser detenido de manera arbitraria y que toda persona privada de su libertad debe ser tratada humanamente y con respeto a su dignidad. Este derecho humano se encuentra tutelado por el artículo 19 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con lo que señalan los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 7º y 10º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el numeral 1º del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión, 3º y 5º de la Declaración Universal de

Derechos Humanos y I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La jurisprudencia internacional sobre derechos humanos constituye un elemento que debe observarse para hacer más amplia la protección a los derechos de las víctimas, extender el alcance de los mismos, y para formar parte de un diálogo entre Corte y organismos defensores de derechos humanos, lo cual se inscribe en la protección más amplia y extensiva de los derechos en consonancia con lo que establece el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia este Organismo Constitucional Autónomo cuenta con elementos para solicitar que la Visitaduría General de esa Institución, integre y turne ante los órganos internos de control competentes los elementos de convicción para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir los servidores públicos por las violaciones a derechos humanos que aquí han quedado descritas, aunado a que se apartaron de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos contenidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, congruente con lo dispuesto por los artículos 1º y 2º del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de Víctimas, y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, los que establecen la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la recomendación que se formule a la dependencia pública incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños que se hubieran ocasionado.

Con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que la autoridad impulse la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, como una manera de brindar al funcionario público nuevos conocimientos, desarrollar sus facultades, permitir su especialización en determinadas áreas novedosas, prepararlo para desempeñar posiciones distintas y adaptar sus capacidades para desempeñar mejor las tareas asignadas.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se inicie una investigación de los hechos, y en su caso, lo turne ante el órgano de control competente, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido AR1, AR2, AR3, y AR4 tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación.

SEGUNDA. Se proceda a la reparación del daño en favor de V1, V2 y V3, consistente en el tratamiento psicológico necesario para restablecer la salud emocional que presenten.

TERCERA. Que los agentes de la Policía Ministerial reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos, particularmente sobre los derechos que prevalecen en la detención y aprehensión de las personas, debiendo remitir la constancia que acredite su cumplimiento.